UNIVERSIDADES EFICIENTES

Wert plantea medidas sensatas que deben aplicarse con rigor y sin demora. La calidad de la enseñanza no solo es cuestión de dinero, sino también de mejoras institucionales y de gestión

EL ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció ayer ante los consejeros autonómicos las medidas de ahorro previstas por el Gobierno para la enseñanza universitaria, que incluyen la subida de las tasas hasta un máximo del 50 por ciento. Asimismo, se prevé la reordenación de los títulos de grado y la revisión de los complementos de investigación que perciben los profesores, de manera que se retribuya el trabajo efectivo. El ministro ha puesto sobre la mesa una serie de datos que reflejan nuestra realidad universitaria: ninguna institución española se sitúa entre las 150 mejores del mundo, hay un 30 por ciento de abandono de los alumnos (el doble de la media europea) y el mercado no ofrece empleo al 20,8 por ciento de los universitarios recién titulados. Las medidas están bien orientadas y deben ser analizadas desde el punto de vista del interés general, sin atender a consideraciones partidistas o a la defensa de cuotas de

poder académico. En todo caso, sería deseable buscar soluciones —al menos transitorias— que no perjudiquen a ciertas titulaciones humanísticas de larga tradición en la Universidad, aunque ahora tengan menor demanda.

Es notorio que el gasto público en educación superior (1,2 por ciento del PIB, un nivel normal en la OCDE) no produce rendimientos satisfactorios. Wert plantea medidas sensatas que deben aplicarse con rigor y sin demora. Al igual que ocurre con el copago farmacéutico el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo en materia de comunicación, para explicar a la opinión pública los criterios que justifican esta racionalización del gasto educativo. La calidad de la enseñanza no solo es cuestión de dinero, sino también de mejoras institucionales y de gestión, introduciendo cuando sea preciso principios de competencia y estimulando a los mejores alumnos y profesores. Es imprescindible acabar también con el localismo y la sobreoferta de grados, másteres y doctorados. También hay que evaluar el modelo de gobernanza, y en ello debe colaborar la propia CRUE, al margen de intereses corporativos. Frente a viejos criterios burocráticos, es preciso apostar por la relación entre Universidad y empresa, hacer rentable la inversión pública y buscar la eficiencia de las instituciones de enseñanza superior.